

# NACIONALIZACIÓN Y REPRESIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MAR DEL PLATA. EL CIERRE DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES (1975-1977)

GASTÓN JULIÁN GIL

Gastón Julián Gil es Investigador del CONICET y Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  
e-mail: gasgil@mdp.edu.ar

## Resumen

El proceso de nacionalización de la Universidad Provincial de Mar del Plata, que absorbió además a la Universidad Católica «Stella Maris», se produjo en el contexto de una profunda represión estatal y paraestatal. En ese marco, las carreras de ciencias sociales que, desde la última parte de los años sesenta, le habían dado vida a la Facultad de Humanidades de la casa de estudios estatal, fueron eliminadas completamente de la oferta curricular. Tras el cierre de inscripción de 1975, dos años más tarde, esa misma facultad sólo ofrecería aquellas carreras que se dictaban en su antecesora privada y confesional (historia, letras, geografía, inglés). Por ende, en este artículo se describe el contexto sociopolítico que enmarcó la vida universitaria de la época, pero muy especialmente se pone énfasis en las especificidades institucionales y el conjunto de actores en pugna en ese ámbito puntual. Así, las complejas disputas a nivel de la política provincial de Buenos Aires, los enfrentamientos dentro de la militancia del peronismo en la universidad y las propias características de Mar del Plata, constituyen algunos de los ejes más importantes del caso analizado.

## Summary

The process by means of which the Provincial University of Mar del Plata was nationalized (absorbing as well the private Catholic University «Stella Maris») took place within a context of hard governmental and para-governmental repression. The degrees in social sciences (which had promoted the foundation of the Faculty of Humanities in the state university) were completely eliminated. After the closure of inscriptions in 1975, two years later this faculty would only offer the degree programs that had been developed in the catholic and private university: History, Literature, Geography, and English. This article accounts for the sociopolitical context of the university life of that period, and it focuses on specific institutional activities and contending actors in this concrete scenario. Some of the principal axes to be considered in the analyzed case are: (1) complex political disputes in the Province of Buenos Aires, (2) clashes within the peronist militancy in university, and (3) proper features of Mar del Plata City.

## UNA UNIVERSIDAD DEL INTERIOR

La actual Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) es el resultado de 50 años de vida institucional que transcurrieron en dos ámbitos diversos —uno provincial y otro privado y confesional— que se fusionaron en 1975. En aquel año, en medio de una violenta represión estatal y paraestatal durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), la Universidad Provincial de Mar del Plata (UP, fundada en 1961)<sup>1</sup> pasó al ámbito nacional e incorporó pocos meses más tarde a la Universidad Católica «Stella Maris» (UC), que funcionaba bajo la órbita del Obispado de Mar del Plata.

Tras la muerte de Juan Domingo Perón en junio 1974, se produjeron importantes cambios en el Ministerio de Educación, que alcanzaron de manera muy directa a las universidades nacionales. Aunque esos nuevos lineamientos no se transmitieron unidireccionalmente a los diversos ámbitos educativos provinciales, no por ello dejaron de hacer sentir sus efectos. Luego del tiempo de la «universidad nacional y popular» de la «primavera camporista»<sup>2</sup> de 1973, las universidades comenzaron a sufrir contramarchas en los procesos que se venían gestando desde los primeros años de la década del setenta. Además de la participación estudiantil que había ganado importantes espacios de poder y decisión en las casas de estudio, las estructuras curriculares también fueron sensibles modificaciones. En el caso puntual que nos ocupa, una de las consecuencias más notables derivó en el cierre de las carreras de ciencias sociales que le habían dado vida a la Facultad de Humanidades de la UP, y que habían experimentado una intensa vida político-académica.

<sup>1</sup> La conflictiva renuncia del Estado nacional al monopolio de la educación superior (la controversia «Laica o Libre») en 1959, habilitó no sólo la fundación de universidades privadas, sino también que las provincias pudieran crear sus propias casas de altos estudios. Así ocurrió en 1961 con el gobierno provincial bajo el mandato de Oscar Alende. Aquellos conflictos fueron analizados por Valeria Manzano, «Las batallas de los «laicos»: movilización estudiantil en Buenos Aires, septiembre-octubre de 1958», en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani»*, Tercera serie, n° 31, 2009.

<sup>2</sup> Héctor José Cámpora (1909-1980) asumió como presidente constitucional el 25 de mayo de 1973, luego de haber ganado las elecciones el 11 de marzo. Su mandato se extendió hasta el 13 de julio del mismo año, cuando renunció junto con el vicepresidente Vicente Solano Lima luego de los trágicos sucesos de Ezeiza en ocasión del regreso de Juan Domingo Perón al país. Aquella «primavera camporista» se caracterizó por una notable influencia ejercida por la Tendencia Revolucionaria del peronismo, limitada y revertida luego de la renuncia de Cámpora.

En este artículo se describe el contexto de nacionalización de las dos universidades marplatenses, en el que se produjo la eliminación de carreras como Antropología, Sociología, Psicología y Ciencias Políticas. Para ello, se analizan de manera principal los actos administrativos de la UP y de la UNMdP y las publicaciones en los medios gráficos, además de trabajar con los datos aportados en entrevistas a los actores de época.

Todo ese material es puesto en perspectiva con el objetivo de mostrar los conflictos que, en un corto lapso de tiempo (menos de tres años), repercutieron notablemente sobre el desarrollo de las ciencias sociales en Mar del Plata. Conflictos de naturaleza política que protagonizaron diversas facciones, principalmente del peronismo, en torno a las definiciones y acciones del Estado sobre la educación superior. La exploración en detalle de este caso, en clave narrativa, se plantea para poner en escena la complejidad y la importancia de los antagonismos que se habían hecho carne en el peronismo mucho tiempo antes del golpe, y que resultó un preludio del terrorismo de estado implementado a partir del 24 de marzo 1976 cuando las Fuerzas Armadas destituyeron a María Estela Martínez.

El discurso faccioso, la violencia política, las políticas públicas de educación superior, son algunos de los ingredientes que aparecen de manera prioritaria en un relato que anticipa la tragedia. Así, se podrá ver en acción, al menos parcialmente, el funcionamiento de un sistema faccional<sup>3</sup> complejizado a escalas de gran magnitud, con redes que excedían ampliamente el territorio desde el cual operaban. Algunas de esas facciones funcionaban, de manera principal dentro del peronismo, como redes de cuasi-grupos<sup>4</sup>, es decir, como entidades que sin una estructura reconocible, pero en la que sus miembros tenían intereses y comportamientos en común que los transformaban en verdaderos grupos potenciales. Las distintas facciones aparecerán, entonces, como medios precisos para organizar a las personas en contextos de conflicto político, en el que los principales referentes se esforzaron por mostrar una importante capacidad de manejar los recursos (humanos y materiales) y lograr así cuotas más altas de poder. Y como en toda lucha facciosa,

<sup>3</sup> Ralph Nicholas, «Segmentary factional political systems», en: Marc Swartz, Victor Turner y Arthur Tuden (eds.), *Political Anthropology*, Chicago, Aldine, 1966, pp. 49-59.

<sup>4</sup> Adrian C. Mayer, «La importancia de los cuasi-grupos en el estudio de las sociedades complejas», en: Michael Banton (comp.), *Antropología social de las sociedades complejas*, Madrid, Alianza, 1999, pp. 108-133.

uno de los principales recursos de acción y, eventualmente (aunque no en este caso), de resolución de conflictos es la *vendetta*. Sostenidas en el mecanismo de la reciprocidad negativa<sup>5</sup>, las *vendettas* son actos de venganza que apelan a la noción de comportamiento honorable, pero que también implican un violento juego político-económico, un modo particular de conseguir objetivos<sup>6</sup>, en este caso a través de la utilización de la fuerza física. Y como queda claro en este relato, estas *vendettas* que produjeron muertes en muchos casos, se han mostrado como modos específicos de comunicación e interacción<sup>7</sup> además de contribuir a la consolidación de identidades colectivas a través de una solidaridad vindicatoria<sup>8</sup>.

### CAMINO A LA NACIONALIZACIÓN

Cuando en el marco de la existente Facultad de Psicología de la UP se crearon desde 1968 carreras como Antropología, Sociología y Estudios Políticos (luego Ciencias Políticas), se conformó una Facultad de Humanidades que se plegaría vertiginosamente a los debates sociopolíticos que acompañaron el devenir de las ciencias sociales argentinas y la radicalización política del campo intelectual<sup>9</sup>. La incorporación paulatina de profesores (casi con exclusividad profesores viajeros) que estaban involucrados en esas controversias, junto con otros que concebían la docencia de un modo más convencional o quienes podían ser considerados «cientificistas»<sup>10</sup>, le dio a esa facultad una riqueza teórica y política que configuró

<sup>5</sup> Marshall Sahlins, *Stone Age Economics*, New York, Aldine de Gruyter, 1972.

<sup>6</sup> Anton Blok, *The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960*, Oxford, Basil Blackwell, 1974.

<sup>7</sup> Ernst Halbmayer, «Socio-cosmological contexts and forms of violence. War, vendetta, duels and suicide among the Yukpa of north-western Venezuela», en: E. Schmidt y Ingo W. Schröder (eds.), *Anthropology of Violence and Conflict*, London, Routledge, 2001.

<sup>8</sup> Margarita Xanthakou, «Violence en trois temps: vendetta, guerre civile et désordre nouveau dans une région grecque», en: Françoise Héritier (org.), *De la violence II*, Paris, Odile Jacob, 1999.

<sup>9</sup> Ana M. Barletta, «Peronización de los universitarios (1966-1973). Elementos para rastrear la constitución de una política universitaria peronista», en: *Pensamiento Universitario*, n° 9, vol. 1, 2001; Ana M. Barletta y María Cristina Tortti, «Desperonización y peronización en la universidad en los comienzos de la partidización de la vida universitaria», en: Pedro Krotzsch (org.), *La Universidad cautiva*, La Plata, Al Margen, 2002.

<sup>10</sup> Gastón Julián Gil, *Las sombras del Camelot. La Fundación Ford y las ciencias sociales en la Argentina de los sesenta*, Mar del Plata, EUEM, 2011.

un espacio altamente plural<sup>11</sup>. Desde la controversial figura del decano José Antonio Güemes<sup>12</sup>, pasando por referentes destacados de las «cátedras nacionales»<sup>13</sup> o docentes con trayectorias en el Ejército (el propio Güemes, Virgilio Beltrán) y en las fuerzas de seguridad (Ernesto Hipólito), aquella Facultad de Humanidades se configura como un interesante ejemplo del clima de época de los últimos años de los sesenta y principios de los setenta. Peronismo de «izquierda», peronismo de «derecha», trotskistas, comunistas, maoístas, socialistas, nacionalistas, revisionistas, todos ellos convivían —no sin conflictos— en una unidad académica en franca expansión que progresivamente congregaba más alumnos involucrados en política y ya volcados hacia la senda revolucionaria.

Iniciados los años setenta, el nivel de conflictividad en la sociedad argentina fue creciendo y la universidad fue uno de los espacios de mayor expresión de esos conflictos. Mientras la «peronización» de los intelectuales y el estudiantado se profundizaba, la dictadura militar iba cediendo posiciones hasta levantar la proscripción del peronismo. Con el triunfo de Cámpora en las elecciones presidenciales de 1973, se abrió la etapa de la «universidad nacional y popular», en la que se declaraba colocar a las casas de altos estudios «al servicio del pueblo». En un período que se extendió poco más de un año, en las universidades argentinas fueron nombrados, en general, para los cargos de gestión en los rectorados y decanatos, figuras afines a la Tendencia Revolucionaria del peronismo. El período se interrumpió drásticamente después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974, ya que la nueva presidenta, María Estela Martínez de Perón, relevó al ministro de Educación, Jorge Taiana, y colocó en su lugar a una figura de signo

<sup>11</sup> Gastón Julián Gil, «Periferia, militancia revolucionaria y transformación de la sociedad. Un estilo antropológico en los sesenta y los setenta en la Argentina», en: Gastón Julián Gil (dir.), *Universidad y utopía. Ciencias sociales y militancia en la Argentina de los 60 y 70*, Mar del Plata, EUEM, 2010.

<sup>12</sup> Gastón Julián Gil, «Tradición y culturalismo. José Antonio Güemes y los inicios de la antropología en la Universidad de Mar del Plata», en: *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, n° 22, 2010.

<sup>13</sup> Estas «cátedras nacionales» fueron llevadas adelante, principalmente, por jóvenes sociólogos adherentes mayormente al peronismo y a ciertas vertientes conservadoras del catolicismo. Tras el golpe militar de 1966, en algunos casos ocuparon el lugar de los renunciantes tras la «Noche de los bastones largos». Fueron designados directamente por el rectorado de la UBA y se propusieron «crear nuevos enunciados y categorías teóricas que permitiesen generar propuestas no sólo para comprender sino, sobre todo, para transformar la realidad nacional». En: Pablo Buchbinder, *Historia de las universidades argentinas*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 197.

contrario, Oscar Ivanissevich<sup>14</sup>. Estas modificaciones sustanciales en los criterios de gestión de las universidades públicas no impactaron inmediatamente en la UP.

Aunque la Provincia de Buenos Aires había sufrido –todavía con Perón en vida– la renuncia del gobernador José Bidegain, cercano a la Tendencia Revolucionaria, el ministro de educación provincial, Alberto Baldrich<sup>15</sup>, se había mantenido en su cargo durante el nuevo gobierno del sindicalista metalúrgico Victorio Calabró. En la UP iniciado el año 1974, el interventor Julio Aurelio fue reemplazado por Pedro Arrighi en el mes de marzo. Aurelio venía desarrollando una intensa labor docente y de gestión en la UP. Sociólogo graduado en la Universidad Católica de Buenos Aires y militante peronista, desde finales de los años sesenta se había involucrado en diversos aspectos de la gestión (elaboración de planes de carrera, dirección de departamentos) antes de ser nombrado interventor en 1973. El propio Aurelio definió su labor al frente de la UP como la de:

«un equilibrista entre varios sectores en pugna. Yo venía del peronismo pero no estaba encuadrado orgánicamente en ninguna facción del peronismo, como Montoneros. Entonces hubo que cuidar muchas relaciones porque si bien mantuve una cordial relación con la JP, también lo hice con las 62 Organizaciones»<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Oscar Ivanissevich (1895-1976) asumió el 14 de agosto de 1974 y permaneció en el cargo hasta el 11 de agosto de 1975. Su labor fue conocida como La «misión Ivanissevich», que se concentró principalmente en la vida universitaria con el objeto de deshacer los cambios que se habían producido en los últimos años, en particular durante la gestión del anterior ministro Jorge Taiana y la influencia marcada de la JUP y demás agrupaciones de la Tendencia Revolucionaria. En términos puntuales su objetivo explícito era «eliminar el desorden» en la Universidad y producir su «depuración ideológica», tal como rezaba el «documento reservado» del Consejo Superior del PJ, conocido a los pocos días de la ejecución sumaria de José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973, tan sólo dos días después del triunfo electoral de Perón con el 62 % de los votos. Inés Izaguirre, «La Universidad y el Estado terrorista. La Misión Ivanissevich», en: *Conflicto Social*, año 4, n° 5, 2011, p. 291. Ivanissevich ya había ocupado la cartera de educación durante el primer peronismo, y es caracterizado por Terán por su «actitud antiliberal e irracionalista no exenta de histrionismo del funcionario peronista, que no vaciló en calificar de «degenerado» al arte abstracto». Oscar Terán, «Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-1980», en: Oscar Terán (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, p. 65.

<sup>15</sup> Según lo manifestó al autor el interventor Julio Aurelio, Baldrich iba a dejar su cargo pero continuó por un pedido expreso de Juan Domingo Perón al propio ministro y al gobernador Calabró. Entrevista personal, noviembre de 2006.

<sup>16</sup> Entrevista personal, noviembre de 2006.

Una de las tareas pendientes, pero en estado avanzado, que Aurelio dejó en su paso por el rectorado, fue la incorporación de la UC al ámbito del Estado, lo que era un poderoso anhelo de la comunidad universitaria marplatense. El 26 de julio de 1973, ambas universidades habían firmado un convenio en el que se declaraba «común espíritu e identidad de miras». Los rectores de ambas casas de estudios, el propio Aurelio y Hugo Amílcar Grimberg por la UC, firmaron un nuevo convenio el 22 de diciembre de 1973 en el que las carreras que se dictaban en la universidad confesional pasaban al ámbito de la UP, todo ello ad-referéndum de las autoridades provinciales y del obispo de Mar del Plata, monseñor Eduardo Pironio<sup>17</sup>. La intervención estatal en la UC se había hecho imprescindible ante la progresiva eliminación de los aranceles que fue propiciado por los estudiantes con el apoyo de Pironio. De esa manera, la UC pasó a ser completamente dependiente, desde 1974, de los aportes del tesoro provincial, que no siempre se efectuaron en tiempo y forma, dando lugar a variados problemas políticos y administrativos que se prolongaron durante casi dos años. Además, la UC estaba jaqueada por la violenta conflictividad entre la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), particularmente en el ámbito de la Facultad de Derecho. Pese a que la estatización (de la original provincialización se pasaría poco más tarde a una nacionalización) de esa casa de altos estudios estaba planificada para 1974, recién en diciembre de 1975 quedó confirmada en su totalidad, y en 1976 la recientemente creada UNMdP pasó a contener a la UP y a la UC. Aquellas demoras –como se verá más adelante– llegaron a poner en duda incluso la continuidad de los ciclos lectivos de 1974 y 1975 en la UC.

La gestión de Pedro Arrighi en la UP no llegó a durar dos meses, y se terminó en los primeros días de mayo de 1974 en el medio de tomas, asambleas interclaustrales y hasta detención de docentes. De acuerdo con las informaciones periodísticas, el ámbito universitario local no toleró el intento de Arrighi de rechazar la integración

<sup>17</sup> Eduardo Francisco Pironio (1920-1998) fue un destacado sacerdote católico que ascendió hasta el cardenalato en 1976. Aunque no adhirió al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, sufrió una gran cantidad de amenazas e intimidaciones, presuntamente de los sectores «de derecha» del peronismo como la Triple A, y de grupos militares, entre 1975 y 1976. Autor de numerosas publicaciones vinculadas con la juventud y la responsabilidad social de la Iglesia, Pironio era sumamente respetado por la militancia «de izquierda» de la época y su papel en la vida universitaria marplatense suele ser reivindicado en los testimonios sobre la década del setenta.

del personal docente y no docente de la UC en su futura estatización<sup>18</sup>. La conflictividad llegó a tal punto que, para el mes de mayo, las clases no se habían iniciado. Como consecuencia, el ministro Baldrich cesó a Arrighi en sus funciones, y en su lugar nombró a Virgilio Homero Alsinet como encargado de despacho. La prensa gráfica marplatense publicaba periódicamente informaciones sobre los conflictos en la UP y hasta se manejaban versiones sobre el futuro rector. Según esas mismas noticias, tanto el ministro Baldrich como el gobernador Calabró<sup>19</sup> seguían de cerca los acontecimientos, y bajo sus auspicios se confirmó –al menos en intención– la futura nacionalización de todas las universidades provinciales y la incorporación de la UC, como daban cuenta los medios locales el 18 de mayo de 1974. Un día más tarde de esos anuncios oficiales, asumió como nuevo rector interventor Juan Pablo Oliver, un abogado ligado orgánicamente al peronismo y ubicado «en una ideología revisionista de derecha –nacionalista, identificada con Dardán, Sánchez Sorondo, los hermanos Irazusta, Palacio, Iburguren, etc.–»<sup>20</sup>. El nuevo rector no trajo la «normalidad» ansiada por los medios locales, ya que «manifestaciones del doctor Oliver en el sentido de que no era resorte de la Provincia la actual situación de la Católica, causaron nerviosa inquietud en los claustros de esta casa de estudios»<sup>21</sup>. Esas imprudentes declaraciones continuaron creando confusión en el ámbito universitario y sembrarían la incertidumbre sobre la nacionalización de

<sup>18</sup> En ocasión de una reunión entre monseñor Pironio, el ministro Jorge Taiana y el gobernador Calabró, se publicó en un medio gráfico que «se sabe, la integración de ambas universidades quedó frustrada durante la gestión del doctor Arrighi, quien dispuso la creación de iguales carreras en la Católica pero sin hacer el trasvasamiento antes acordado». (*El Trabajo*, 23/05/1974). En esa misma publicación se mencionaba que la nueva ley universitaria llevaba un mes de vigencia y que las universidades debían adecuarse al nuevo régimen de co-gobierno, compuestos por los claustros docentes, estudiantil y no-docente. También por aquellos días, el diario metropolitano *Noticias* recordaba la oposición que Pedro Arrighi había llevado a cabo por la incorporación de la UC al Estado, porque lo consideraba perjudicial, además de que «se había establecido con intenciones que prefería no juzgar» (27/05/1974).

<sup>19</sup> Victorio Calabró ha sido ubicado, dentro de la interna de Partido Justicialista de la época, como líder de una línea «antiverticalista» que, entre otros aspectos, le valió su expulsión partidaria «acusado de actitudes de indisciplina y pro golpistas. Esta situación se articuló con la rebelión de los parlamentarios en el Congreso, en la que un grupo de diputados nacionales formó un bloque de peronistas disidentes y antiverticalistas, privando al gobierno de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados». Alicia Servetto, *1973/1976. El gobierno peronista contra las «provincias montoneras»*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, p. 222.

<sup>20</sup> *La Capital*, 19/05/1974.

<sup>21</sup> *La Capital*, 21/05/1974.



ambas universidades durante casi un año y medio. Los estudiantes ratificaron en este caso el «estado de alerta», más allá del compromiso de palabra de los funcionarios provinciales de garantizar el traspaso a la nación de la UP y sostener, a través de subsidios, el funcionamiento de la UC hasta su nacionalización definitiva.

La permanencia en el cargo de Oliver fue aún más efímera que la de Arrighi y no alcanzó a durar veinte días. Cuestionado severamente por la militancia estudiantil, terminó renunciando estruendosamente a principios de junio, denunciando presiones del ministro Baldrich (y también de senador Elizagaray)<sup>22</sup> para nombrar, como decanos en las distintas facultades, a personas ligadas y exigidas por la JUP. En declaraciones formuladas en la sala de periodistas de la casa de gobierno provincial, el rector saliente declaró que Baldrich:

«en lugar de apoyarme para el imprescindible principio de autoridad, me induce a ceder ante cuanta exigencia impertinente formula un determinado y minúsculo grupo subversivo reiteradamente condenado por el general Perón, inclusive con pretensión de designar en cada casa de altos estudios a decanos o directores sin otros antecedentes que los de su pertinente prontuario policial»<sup>23</sup>.

Ante la nueva vacancia, finalmente se impuso el nombre del médico Eulogio Mendiondo, quien ya antes había sido señalado como un posible rector, lo que terminó confirmándose periódicamente un día después de la salida de Oliver. El ministro Baldrich justificó el nombramiento aduciendo que «el nuevo rector es poseedor de una personalidad espiritual y una sensibilidad de alta política social y cultural, que corresponden plenamente a la importancia y seriedad del momento en que vivimos, dedicado a la reconstrucción de nuestra patria»<sup>24</sup>. El propio funcionario provincial prosiguió afirmando que:

<sup>22</sup> Oliver declaró que Baldrich y Elizagaray le entregaron una nómina de posibles decanos para todas las facultades, todos ellos –según su óptica– ligados a la JUP y Montoneros, a los que caracterizaba como muy activos pero con una mínima representación, de apenas el «3 ó 4 %». El rector saliente afirmó que llegó a esa conclusión cuando un grupo de militantes de la JUP le entregó una lista, dos días después de la primera, «exactamente igual». *El Atlántico*, 05/06/1974.

<sup>23</sup> *La Capital*, 05/06/1974.

<sup>24</sup> *El Atlántico*, 06/06/1974.

«el doctor Mendiondo agrega esta sensibilidad para comprender lo que es nuestra juventud y el momento por el que atraviesa. A la juventud hay que acompañarla –dijo–, hay que ponerse a su lado, hay que colocar el corazón de uno junto al de la juventud e ir la ayudando a que encuentre el auténtico camino que quiere el general Perón y nuestra Patria precisa»<sup>25</sup>.

Con Mendiondo, que se venía desempeñando como director del Hospital Regional, vendría la paz y la anuencia de los sectores estudiantiles, la nueva ratificación de la nacionalización de las dos universidades –aunque ya se reconocía que iba a ser escalonada– y el nombramiento de los nuevos decanos, entre ellos Juan Samaja al frente de Humanidades<sup>26</sup>. Tras haberse aprobado, a los pocos de días de asunción del nuevo rector, un petitorio de 14 puntos de la asamblea interclaustrales, la línea discursiva que emanaba desde rectorado recuperó las principales consignas que se destacaban durante la «primavera camporista». Ello quedó claro con el lanzamiento de las «Bases de la reconstrucción universitaria», en un acto que se abrió, según *La Capital*, con el himno nacional continuado por la marcha peronista. La necesidad de superar estructuras vigentes y de recuperar los lineamientos de una «universidad nacional y popular» que planteara un genuino «proyecto nacional» dirigido –en-

<sup>25</sup> *Ibíd.*

<sup>26</sup> Los diversos decanos de la Facultad de Humanidades fueron personajes que dejaron su impronta, salvo alguna excepción, que incidieron notablemente en los distintos espacios curriculares y en el devenir de las diversas carreras. En el caso puntual de antropología, la cercanía de sus principales referentes, sobre todo su director, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, trajo serios problemas de continuidad en la gestión de espacios curriculares concebidos en 1971, cuando existía una convivencia mucho más pacífica y con mayor independencia de las afiliaciones partidarias. Todos estos procesos han sido analizados en: Gastón Julián Gil, «Ideología, represión e investigación de campo. La carrera de antropología de Mar del Plata», en: *Anuario de Estudios en Antropología Social*, n° 3, 2006, pp. 53-73; Gastón Julián Gil, «Una experiencia universitaria «frustrada». Persecución y represión antes del golpe en la Universidad de Mar del Plata», en: *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, n° 20/21, 2008, pp. 91-119; Gastón Julián Gil, «Tradición y culturalismo. José Antonio Güemes y los inicios de la antropología en la Universidad de Mar del Plata», en: *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, n° 22, 2010, pp. 101-113; Gastón Julián Gil, «Periferia, militancia revolucionaria y transformación de la sociedad. Un estilo antropológico en los sesenta y los setenta en la Argentina», en: Gastón Julián Gil (dir.) *Universidad y utopía. Ciencias sociales y militancia en la Argentina de los 60 y 70*, Mar del Plata, EUDEM, 2010, pp. 145-198.

tre otros aspectos— a reducir la dependencia tecnológica, figuraban dentro de un proceso que el mismo Mendiondo definió como de «transformación radical»<sup>27</sup>.

El nuevo interventor cosechó una amplia adhesión de los sectores estudiantiles y, según las informaciones aparecidas en los medios gráficos por aquellos días, también seguía contando con el sostén de los otros dos estamentos del cogobierno, los docentes y los no docentes<sup>28</sup>. Las declaraciones habituales de apoyo a Mendiondo giraban en torno al objetivo de poner la universidad al «servicio del pueblo» y llevar adelante la «liberación nacional», para todo lo cual resultaba necesario asegurar una plena participación estudiantil en la conducción. De hecho, ante los pronto rumores sobre su cese, la universidad fue nuevamente ocupada en la segunda semana de agosto por una «asamblea interclaustrós» que planteaba una enérgica defensa del rector, cuyo cargo tambaleaba luego de la asunción del nuevo ministro Tomás Bernard, tras la salida de Baldrich de la cartera educativa provincial. Los medios publicaron un comunicado de esa asamblea en el que, además de reivindicar la lucha dentro del peronismo en sus 18 años de proscripción, se realizaba una interpretación de la actual situación universitaria:

«comenzamos un proceso de amplia participación estudiantil, docente y no docente en la construcción de una Universidad que sirviera a los intereses de la Nación. Así, se reformulan planes de estudio, se realiza apoyatura pedagógica y asesoría jurídica en los barrios más necesitados, como así también se trabaja por una reivindicación ampliamente sentida por la comunidad marplatense, la nacionalización de las dos universidades. Este proceso es interrumpido por la gestión del doctor Arrighi, donde la comunidad universitaria asume una dura lucha por reimplantar una lucha nacional y popular, política que es garantizada a partir de la asunción del doctor Mendiondo en el rectorado y sus delegados interventores. La participación de la comunidad universitaria gestada a partir de las bases en sus distintos niveles de organización sólo puede ser destruida con una política de represión generada desde el gobierno universitario»<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> *La Capital*, 13/07/1974.

<sup>28</sup> La nueva Ley orgánica de las universidades nacionales sancionada el 14 de marzo de 1974 y promulgada el 25 del mismo mes eliminó la representación de graduados y le otorgó ese derecho a los no docentes.

<sup>29</sup> *La Capital*, 16/08/1974.

En definitiva, la asamblea interuniversitaria se expresó a favor de «luchar hasta las últimas consecuencias por la continuidad de una política al servicio de la liberación nacional, manteniendo la toma del rectorado, decretando el estado de alerta y movilización en todas las facultades»<sup>30</sup>. La calma se recuperó parcialmente luego de una reunión de Mendiondo con el nuevo ministro Bernard, en la que fue ratificado como interventor y «la noticia trajo alivio al ámbito estudiantil, que había sido conmocionado días atrás cuando la reestructuración ministerial a nivel provincial hizo peligrar la continuidad de la política universitaria»<sup>31</sup>.

Mendiondo resiste en el rectorado hasta la primera semana del mes de noviembre. Los medios locales anuncian su renuncia el 8 de ese mes, dejando el camino libre para otro golpe de timón desde el Ministerio de Educación provincial para una universidad de la que estaba a punto de desprenderse. En ese lapso, más precisamente durante el mes de septiembre de 1974, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires autorizó la transferencia a la Nación mediante la homologación de un convenio, al tiempo que aprobó un subsidio para la UC de 3 millones de pesos. Tras la renuncia de Mendiondo, ya no se darían contramarchas en la línea de gestión de la universidad. Los nombramientos pendulares de Baldrich darían lugar a un estilo bien definido a partir de la gestión de Bernard, quien designaría desde los últimos meses de 1974 a funcionarios claramente enfrentados con los lineamientos dominantes de la militancia estudiantil, en especial los ligados a la Tendencia Revolucionaria del peronismo, particularmente la JUP. Ante el nuevo panorama, a través de una solicitada, «Los estudiantes de Mar del Plata» denunciaron ante la comunidad que eran objeto de una persecución que consistía en un:

«ataque encubierto, sistematizado, hacia todos los sectores que conformamos la comunidad universitaria, tales como: amenazas telefónicas y por carta de las tres A, allanamientos y ataques como el perpetrado hace diez días contra la Universidad por un grupo identificado como CNU y CdO, etc., que portando armas de fuego irrumpieron en la Universidad Católica y Provincial, destruyendo vidrios, muebles, golpeando alumnos»<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> *Ibíd.*

<sup>31</sup> *El Atlántico*, 18/08/1974.

<sup>32</sup> *La Capital*, 06/11/1974.

En ese mismo texto, se condenó duramente a la «misión Ivanissevich», además de pronunciarse en contra del proceso de nacionalización de la UP y la UC porque «significa reconstruir la vieja Universidad elitista, cientificista y alejada de la realidad nacional mediante la persecución ideológica, el ingreso restringido, la investigación en manos de empresas privadas, autoritarismo y verticalismo como modo de conducción, para romper desde arriba lo que se viene generando desde abajo». En el segmento final de la solicitada se planteó que

«la única garantía para la normalización de la Universidad era:

- El ingreso irrestricto, que tiende a la masificación de la enseñanza universitaria.
- Participación de todos los sectores (alumnos-docente y no docentes) en las decisiones fundamentales de la vida universitaria.
- Análisis crítico de los contenidos y metodología de la enseñanza, desarrollando la capacidad creativa de los estudiantes.
- Reformulación de los planes de estudios teniendo en cuenta las necesidades del país y de la región.
- Respeto a los organismos representativos que nuclean a la comunidad universitaria (centros de estudiantes, agremiaciones, asociaciones docentes, no docentes, etc.)
- Inserción de la Universidad en el medio, como lo demuestran los convenios e investigaciones, que detectando las necesidades de la realidad nacional circundante, prestan servicios a la comunidad».

Desde los primeros días de noviembre de 1974, los diversos centros de estudiantes de la UP explicitaron su plan de lucha contra la «misión Ivanissevich», a la que caracterizaban como una política en la que primaba el:

«ingreso restringido; la persecución ideológica y la inestabilidad docente, estudiantil y no docente; política represiva manifestada en los cuerpos de policías-celadores rondando por las distintas facultades; avasallamiento, destrucción y clausura de centros de estudiantes y organismos representativos y entrega de patrimonio cultural de la Nación a personajes de la dictadura militar y la Revolución Libertadora»<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> *La Capital*, 08/11/1974.

Pese a estas acciones llevadas adelante por una porción mayoritaria de la militancia estudiantil, la universidad local se vincularía más estrechamente con la gestión de los sindicatos y los comunicados oficiales evidenciarían un directo compromiso contra la violencia guerrillera. Esos lineamientos quedaron cabalmente expresados desde la asunción de Roberto Cursack al frente del rectorado el 8 de noviembre de 1974, nombrado como encargado de despachos. Además, el nuevo funcionario incorporaría a hombres ligados a la CGT local en espacios claves de gestión. Tales serían los casos de dos asesores de la central obrera, Eduardo Cincotta<sup>34</sup>, como secretario general, y Gustavo Demarchi<sup>35</sup>, como coordinador docente.

A poco de asumir, desde la gestión de Cursack se produjo un giro de 180 grados en las políticas y en las invariantes discursivas. En un comunicado de prensa, se categorizó como «elementos antinacionales al servicio del caos y la violencia»<sup>36</sup> a grupos que, según la versión oficial, provocaron destrozos en dos facultades, en directa referencia a la JUP y Montoneros. Además, se definió la tarea por realizar, en ese mismo comunicado, como un «apostolado, de servir a la causa nacional». En una solicitada en los medios locales, que se publicó también el 17 de noviembre, firmada por Cursack, se denunció la obstaculización de «una minoría antinacional que asalta nuestras facultades», por lo que se reclamó «la responsabilidad de los vecinos en general, de los padres o tutores de los alumnos, de los señores profesores, de los compañeros de ATUP»<sup>37</sup>, mucha serenidad en estos momentos

<sup>34</sup> El 15 de abril de 1975, *El Atlántico* daba cuenta del nombramiento de Cincotta como secretario general de la UP. Venía de trabajar como asesor de Pedro Arrighi en la Universidad Nacional de La Plata y se desempeñaba además como asesor de la delegación local de la CGT. Fue detenido durante 2010 por sus vinculaciones con los crímenes de la CNU en la ciudad de Mar del Plata.

<sup>35</sup> Hasta su pedido de captura, fuga y posterior detención en Colombia entre finales de 2010 y principios de 2011 por los crímenes de la CNU en la década del setenta, Gustavo Demarchi nunca dejó de tener una activa presencia en la vida política y judicial marplatense. Además de sus tareas como abogado penalista, Demarchi siempre contó con presencia en los medios locales opinando sobre asuntos varios en materia jurídica y política. De todos modos, su pico de mayor exposición fue cuando representó al peronismo marplatense como candidato a intendente (datos «llamativamente» olvidados en la actualidad) en las elecciones de 1983, en las que quedó en segundo lugar detrás del radical Ángel Roig. En aquella oportunidad, algunos de sus actuales acusadores (y hasta jueces) aparecieron en solicitadas en los medios gráficos locales apoyando su candidatura y destacando que «enfrentó al «proceso» sin ninguna especulación política, mientras otros, hoy candidatos, guardaban «prudente» silencio o eran funcionarios del régimen» (*La Capital*, 28/10/1983).

<sup>36</sup> *La Nación*, 17/11/1974.

<sup>37</sup> Asociación de Trabajadores de la Universidad Provincial.

difíciles. El Estado dispone de los medios legales de fuerza para reprimirlos». Ese posicionamiento quedó mucho más claro cuando hacia el final del mismo mes, «las autoridades de la Universidad Provincial local emitieron un comunicado mediante el cual manifiestan su adhesión al acto a realizarse el próximo sábado en el cual la CGT Regional Mar del Plata colocará una placa recordatoria a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en la lucha contra la subversión»<sup>38</sup>. Ello debe ser enmarcado, por supuesto, en un clima en el que las manifestaciones «en *repudio de la violencia y en defensa de la nación* contra la *subversión*»<sup>39</sup> se generalizaron a gran escala y las Fuerzas Armadas pasaban a cristalizarse «como las víctimas principales del *extremismo*»<sup>40</sup>.

La oposición de la gestión universitaria hacia las manifestaciones políticas de los estudiantes se profundizó cuando una decisión del encargado de despachos prohibió de modo tajante cualquier tipo de acto y asamblea en las inmediaciones de la universidad. Todo ello iba en consonancia con las declaraciones públicas y la gestión efectiva del Ministro de Educación y Cultura, Oscar Ivanissevich quien, por ejemplo, había realizado ominosas declaraciones por cadena nacional de radio y televisión. Distintos medios gráficos reprodujeron fragmentos de la intervención del ministro, que no ahorró subjetivismos y términos altisonantes para estigmatizar a la militancia —principalmente estudiantil— que se le oponía. Fiel a su habitual prédica integrista y nacionalista, Ivanissevich señaló que:

«hablar ahora de volver a la universidad roja es negar los más sublimes sentimientos argentinos y cristianos —concluyó el ministro— las escuelas terciarias quedan abiertas para el trabajo fecundo de los docentes, de los no docentes y de los estudiantes. Que la ceguera de unos pocos no anule los deseos de los que quieren trabajar para nosotros y para el mundo entero. Que la tierra no es colchón para enfermos y haraganes. Es bigornia de titanes, pedestal de la ambición»<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> *El Atlántico*, 27/11/1974.

<sup>39</sup> En Marina Franco, *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y «subversión», 1973-1976*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 76.

<sup>40</sup> *Ídem*, p. 76.

<sup>41</sup> *La Capital*, 19/04/1975.

Ese mismo día, un medio capitalino optó por destacar, de ese discurso, un fragmento en el que el ministro declaró que «la comunidad universitaria debe ser una comunidad de amor entre profesores y alumnos. Si no hay respeto mutuo, si no hay afinidad, no hay amor, no hay universidad ni estudio útil; no conozco ninguna universidad que se haya fundado sobre el odio»<sup>42</sup>. Pocos días más tarde, la Universidad clausuró tres centros de estudiantes (arquitectura, humanidades y ciencias turísticas) «habiéndose hallado elementos probatorios de actividades políticas, las que está expresamente prohibidas por la Ley Universitaria»<sup>43</sup>. Por resolución N° 531, Cursack se amparó en la ley 20.654, en la que «queda prohibido en el ámbito de la universidad el proselitismo político, partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional». En la misma nota periodística, se informó que en el procedimiento en el centro de estudiantes de Ciencias Turísticas «estuvo presente personal de la delegación de la Policía Federal. En dicho centro de estudiantes fueron hallados elementos para impresión de panfletos (stenciles) de la organización subversiva autoproscripcta, banderas, brazaletes, estandartes, etc.»<sup>44</sup>.

También en ese mes de abril, los diarios marplatenses daban por confirmada la nacionalización de la UC, aunque –por ejemplo– *El Atlántico* admitía que «el problema central consiste, en estos momentos, en cómo resolver el problema económico de esa casa de altos estudios hasta tanto se formalice su nacionalización»<sup>45</sup>. Las noticias sobre la situación financiera de la UC recibieron una amplia cobertura y hasta se publicaron detalles de los telegramas y notas que los distintos funcionarios (como el rector Grimberg o monseñor Pironio) de la UC le enviaron a la presidenta y al ministro de Educación y Cultura. Esos mismos funcionarios, en especial el obispo Pironio, debían desmentir periódicamente las versiones sobre cesantía de docentes. Desde la gestión de la UC, ya se había declarado el estado de emergencia económico-financiera, que caracterizó todo el año de ejercicio hasta que en diciembre se cumplieron los pasos administrativos necesarios para la estatización.

<sup>42</sup> *La Razón*, 19/04/1975.

<sup>43</sup> *La Capital*, 26/04/1975.

<sup>44</sup> La referencia a la autoproscripción remite a Montoneros, cuya conducción decidió el pase a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974.

<sup>45</sup> *El Atlántico*, 10/04/1975.



Los diarios locales publicaron con frecuencia las entregas de subsidios estatales a la UC, muchas de ellas canalizadas directamente a través de los máximos funcionarios de la UP. Las eventuales demoras en esos subsidios llevaron a las autoridades de la UC, según sus propias versiones y como apareció publicado en los medios gráficos locales, a decretar el cierre del establecimiento a mitad del ciclo lectivo<sup>46</sup>.

En ese marco, el tema de la nacionalización solía ser objeto de tratamiento regular por parte de los medios gráficos locales. Así es que podían leerse ratificaciones permanentes, tanto de funcionarios provinciales como nacionales, que confirmaban el rumbo del camino fijado por la ley nacional. Esos funcionarios aclaraban reiteradamente que los pasos administrativos se iban cumpliendo y que tanto los trabajadores docentes como no docentes no iban a perder sus derechos laborales con el traspaso. En cuanto a la nacionalización de la UP, para abril de 1975 era un hecho burocrático irreversible. El decreto presidencial N° 967 dejó incorporada a la casa de altos estudios provincial bajo los efectos de la Ley Universitaria dictada en 1974. Aquel decreto firmado por la presidenta María Estela Martínez el 14 de abril quedó *ad referendum* del Congreso de la Nación, que finalmente lo promulgó el 30 de septiembre del mismo año, bajo la ley N° 21.139. Sin embargo, aquella primera versión de la normativa no había incorporado a la UC, confirmando los temores que se fueron agigantando en el tortuoso camino de 18 meses. Aunque hacia el mes de octubre, se fueron logrando los compromisos de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional para corregir la normativa. Fue así que para el 18 de octubre, los medios locales confirmaron la enmienda de la ley que incorporaba a la UC al proceso de nacionalización y otorgaba un plazo de 60 días para que se hiciera efectiva, como ocurrió finalmente en diciembre de 1975, a partir del convenio rubricado entre el obispo Rómulo García (reemplazante de

<sup>46</sup> Por ejemplo, durante septiembre de 1975, la alegada imposibilidad de hacer frente a los aumentos salariales para personal no docente y la huelga decretada por ese sector, motivó un cierre del establecimiento que prontamente fue revertido ante otro aporte estatal. Los diarios locales cubrieron intensamente ese cierre temporario de la UC, episodio en torno al cual distintos sectores de la política universitaria expresaron su «malestar» por la demorada estatización. La posición más dura fue la que manifestó la CNU, que aprovechó la ocasión para cuestionar una vez más, de forma severa, a la gestión de la casa de estudios, en especial a monseñor Pironio, por no haber concretado la provincialización en 1974 durante el rectorado de Pedro Arrighi.

Pironio en la Diócesis marplatense) y el titular de la cartera educativa nacional, Pedro Arrighi, justamente con quien habían comenzado los conflictos por la estatización de la UC<sup>47</sup>.

### **PATRIA, «TERRORISMO» Y MOVIMIENTO OBRERO**

Todo ese 1975 sería un año en el que crecieron exponencialmente los atentados y las muertes con origen político en la sociedad argentina, y ello se vería altamente reflejado en el mundo universitario marplatense. Medios gráficos locales y nacionales publicaron de manera continua los sucesos de mayor repercusión, muchos de ellos de consecuencias trágicas y otros atentados menores sin víctimas fatales que lamentar. En ese contexto, van a aparecer diversos comunicados y solicitadas firmadas por los máximos responsables de la universidad local, todas ellas girando sobre los mismos puntos. En ocasiones nombrando directamente a las organizaciones político-militares (OPM de ahora en adelante), como Montoneros, esos textos formularon reiteradamente afirmaciones y lecturas sobre el contexto político del país y asumieron representar fielmente los deseos de «paz» del pueblo argentino, marco global de toda intervención pública.

Las condenas cada vez más explícitas y firmes hacia la guerrilla y, en menor medida, a la juventud universitaria, giraron sobre una serie de motivos y temas articuladores de connotación nacionalista que se mantendrían por muchos años más en el discurso oficial de los organismos estatales en la Argentina. En marzo, los hechos más destacados, y a la vez más trágicos, fueron los originados a partir del día 20 con el asesinato de Ernesto Piantoni, cuyos compañeros de militancia de la CNU vengaron su muerte aplicando el «5X1» la misma noche del velorio.

<sup>47</sup> En los primeros días de diciembre de 1975 ya se daba por hecho, en el ambiente universitario, la concreción del traspaso. Uno de los puntos más problemáticos, según señalaban los diarios marplatenses, se refería a las instalaciones, ya que el Estado nacional requería que el obispado cediera el edificio en donde se venían dictando las carreras, como en efecto sucedió. Ante la inminente nacionalización, *La Capital* publicó una entrevista con el ministro Arrighi en la que declaró que «la universidad argentina actual es una universidad en paz, es una universidad silenciosa, donde se trabaja, se estudia y se investiga. Hay una gran masa de alumnado, diría, que casi el cien por ciento, que lo único que quiere es cumplir con su razón de ser, es decir, estudiar y capacitarse para ser útil a la comunidad» (*La Capital*, 08/12/1975).

Piantoni era un abogado de 31 años de anterior militancia en el grupo Tacuara en la década del sesenta, y era señalado como el líder de la CNU en Mar del Plata. Además de haber defendido como abogado a los imputados por el asesinato de la estudiante Silvia Filler en 1971 (otro hecho paradigmático en la vida universitaria marplatense) cumplía funciones como asesor de la CGT. Las *vendettas* de esta agrupación no se acabaron aquella noche, ya que la decana de la Facultad de Humanidades de la UC, María del Carmen Maggi, sería secuestrada 50 días más tarde (el 9 de mayo) y su cuerpo sin vida recién sería encontrado un día antes del golpe militar de marzo de 1976<sup>48</sup>. También durante el mes de marzo, los medios locales publicaron noticias referidas a atentados contra tres docentes<sup>49</sup> de la UP, presumiblemente por parte de los sectores «de derecha». Los últimos días del mes de abril de 1975 ofrecen un panorama en el que los medios gráficos locales publicaron un importante volumen de información vinculada con la universidad, tanto por cuestiones administrativas como por hechos significativos de violencia política. Uno de ellos fue la detonación de un artefacto explosivo en la vivienda del estudiante de sociología Jorge López, destacado militante de la JP Lealtad<sup>50</sup>. Apenas dos días después, *La Capital* publicó la noticia de otro atentado, esta vez

<sup>48</sup> Los imputados de esa muerte están siendo juzgados en la actualidad por delitos de *lesa humanidad*, aunque la mayoría se encuentran prófugos de la justicia local. La violencia política del período ha sido analizada detalladamente, con especial énfasis en la CNU, por María Fernanda Díaz, «La sal del odio. Una historia de bandidos y justicieros en la Mar del Plata de los años 70», en: Gastón Julián Gil (dir.), *Universidad y utopía, op. cit.*, pp. 79-108.

<sup>49</sup> *La Opinión*, el 30/03/1975, daba cuenta de tres atentados contra profesores de la UNMdP, Roberto Vega, Andrés Cabo y de una mujer cuyo nombre no se publicó, aunque sí el de su marido.

<sup>50</sup> JP Lealtad se desprendió de la JP incluida en la Tendencia Revolucionaria luego del asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973. Luego de la fusión, ambas agrupaciones mantuvieron relaciones altamente conflictivas en la vida universitaria marplatense. Los sectores de JP Lealtad alcanzaron mayor preponderancia luego de la renuncia del rector Mendiando y, en el caso de la Facultad de Humanidades, fueron un importante nexo entre el rectorado y los delegados interventores, al menos en lo relativo a sus nombramientos en los primeros meses de 1975. Todo ese proceso se ha mostrado con mayor detalle en Gastón Julián Gil, «Una experiencia universitaria «frustrada». Persecución y represión antes del golpe en la Universidad de Mar del Plata», en: *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, n° 20/21, 2008, pp. 91-119.

con una bomba en la casa de Juan Antonio Bargas<sup>51</sup>, delegado-interventor de la Facultad de Humanidades. Rápidamente, la Universidad publicó una solicitada en los medios locales titulada «que el pueblo juzgue a los inadaptados»<sup>52</sup>, en la que se definió a la acción armada como un «artero golpe, tratando de impedir el pacífico desarrollo del accionar universitario»<sup>53</sup>. Además, se responsabilizó a Montoneros, «organización terrorista autoproscripta», argumentando que «mercenarios apátridas, cumpliendo objetivos inconfesables, intentan, con actos terroristas, doblegar la moral de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de esta Casa de Estudios»<sup>54</sup>.

En ese contexto, las intervenciones públicas de los funcionarios de la ahora UNMDP continuaron incrementándose, ya bajo la evidente conducción de José Catuogno<sup>55</sup>, todavía «asesor académico» y futuro rector normalizador, quien ma-

<sup>51</sup> Bargas fue llevado al decanato por la facción de JP Lealtad, y una de sus primeras tareas fue «ordenar» la planta docente, lo que motivó una extensa nómina de limitaciones, mucho de ellos militantes de la JUP y de las organizaciones político-militares, algunos de los cuales ya no cumplían con sus tareas docentes. Una consecuencia casi inmediata de esa labor fue el explosivo colocado en su casa. Bargas se había graduado recientemente como sociólogo y se había desempeñado «durante treinta años como funcionario de la municipalidad local, y en los últimos años ejerció el cargo de director de personal de la comuna, cumpliendo en la actualidad otras funciones» (*La Capital*, 28/04/1975). Frente a los atentados sufridos por Bargas y López, la universidad publicó una solicitada en los medios locales el 28 de abril, en la que se cuestionaba duramente a los centros de estudiantes, como el de Humanidades, calificándolos de «apóstoles del odio, la destrucción y la violencia». El texto continuaba aclarando que «esta selecta minoría, representante de intereses espurios y alejada del verdadero sentir del estudiantado, no conseguirá torcer la firme voluntad de estas autoridades», ni transformar a la universidad «en una escuela de la guerrilla». También la CGT local y las 62 Organizaciones repudiaron oficialmente los atentados. En un comunicado, destacaron el ejemplo de vida de Bargas, quien se había graduado ya mayor y que demostraba que «a la Universidad del Pueblo la conducen hombres del pueblo» (*E/ Atlántico*, 29/04/1975). Las entidades sindicales rechazaron también, en ese texto, la concepción de «facultad elitista donde el snobismo guerrillero estuvo encaramado en la misma dirección».

<sup>52</sup> *La Capital*, 28/04/1975.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Hacia finales de mes de abril de 1975 se hizo público el nombramiento de Catuogno, quien iría adquiriendo cada vez mayor protagonismo. En las descripciones que los medios hacían de su figura, destacaban su condición de «conocido profesional de familia tradicional marplatense» y su larga trayectoria como militancia peronista. Al momento de asumir y en ocasión del tardío inicio del ciclo lectivo, expresó, en referencia al general San Martín, que «el ejemplo del gran patriota debe constituir la guía permanente que nos indique el camino a recorrer, en busca de una universidad que se constituya en la verdadera forjadora del pensamiento nacional, superadora de la universidad elitista receptora de

nifestó, flanqueado por Eduardo Cincotta y Gustavo Demarchi, que todos en la institución estaban «empeñados en concretar un proceso de paz»<sup>56</sup>. El secretario Cincotta fue más directo al afirmar que «no vamos a permitir que la Universidad se convierta en un comité o en una unidad básica»<sup>57</sup>. Paralelamente, había fundamentado la integración de la UNMDP con la CGT y las 62 organizaciones para forjar un bloque monolítico, mientras se apelaba permanentemente a la figura de Perón<sup>58</sup> y a sus postulados. Además, no se privó de formular un llamado a los padres de los estudiantes para que reflexionen e intervengan sobre la conducta de sus hijos. Los primeros días de mayo mostraron la misma intensidad en las acciones de violencia política y en la línea discursiva emanada desde el rectorado. En esos días, las bombas colocadas en un local de la CNU y en las viviendas del secretario Cincotta y del delegado interventor de Ciencias Turísticas, José Luis Granel<sup>59</sup>, fueron los atentados de mayor repercusión pública, no sólo por los cargos que detentaban las víctimas sino también por las intervenciones públicas que emitieron tanto la universidad como la CGT local. Luego del ataque al local que la CNU poseía en la zona céntrica de la ciudad, en la que no se produjeron víctimas fatales, más allá de los serios destrozos que provocó en las instalaciones atacadas y en sus inmediaciones, la organización agredida emitió un comunicado oficial, al que adhirieron también la Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios y la Concentración de la Juventud Peronista. Allí se postulaba que:

doctrinas exóticas reñidas con nuestra formación humanista y cristiana» (*El Atlántico*, 26/04/1975). También se mostró, en la ocasión, favorable a una «contracción al trabajo que, autoridades, docentes, no docentes y alumnos, deberán realizar como una obligación hacia el pueblo de la nación que con su trabajo fecundo posibilita el desarrollo de estas actividades». Y finalmente, definió la universidad como «patrimonio exclusivo del pueblo», todo ello dentro de «un clima de orden, donde cada estamento respete jerarquías que las funciones imponen».

<sup>56</sup> *La Capital*, 29/04/1975.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Esta asociación que tempranamente el peronismo –aunque no con exclusividad– postuló entre su movimiento político y la propia figura de Perón, con la patria, ha sido analizado detalladamente por Silvia Sigal y Eliseo Verón, *Perón o Muerte*, Buenos Aires, Eudeba, 1997.

<sup>59</sup> Granel era el delegado interventor en la Facultad de Ciencias Turísticas que, por aquellos días y de acuerdo con la repercusión periodística, era la de mayor conflictividad frente a la política de cesantías que se propiciaba desde el rectorado.

«ante el empecinado ataque la sinarquía ERP, CIA, Montoneros, etc., que cada vez atacan más impunemente a nuestra organización nos hacemos el deber de informarle al pueblo, a las autoridades, y también a las delincuencias apátridas que no aflojaremos un paso. Hoy más que nunca, junto a Isabel, aunque gritar nuestra verdad signifique la muerte, Perón, Rucci, Giovenco y nuestro inolvidable compañero Ernesto Piantoni, asesinado recientemente por las mismas manos anónimas, nos comprometieron eternamente con la Patria. Nos atacan a nosotros ¿Por qué? Será acaso porque no pactamos; será acaso porque seguimos peronistas sin casarnos con ningún dirigente traidor: será casualidad que después de movilizar a 10.000 compañeros el 1° de mayo en apoyo del Gobierno Nacional y Popular nos ataca la antipatria en derrota para tratar de recobrar viejos lauros ganados en «gobiernos militares» que los favorecían»<sup>60</sup>.

Entre el 8 y el 9 de mayo, los diarios locales se refirieron a los episodios que involucraron las viviendas de Cincotta y Granel, y en *La Capital* se mencionó que «se presume estarían vinculados con la organización ilegal autoproscripita»<sup>61</sup>. Ante el primero de los hechos, la CGT local emitió un comunicado en el que calificó al atentado contra Granel (también asesor de la CGT) como un «nuevo ataque de la antipatria»<sup>62</sup>. Más en detalle, el texto prosiguió mencionando que «está dirigida contra el orden que impera en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, orden que posibilita que la casa de estudios superiores local, esté al servicio de la Nación y no, como lo era durante las conducciones montoneras anteriores, al servicio de la guerrilla antipopular y antinacional». La nota proseguía con un llamado a «continuar el proceso de Liberación, no solamente del colonialismo, sino también de estos infiltrados que trabajan de adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero». Como puede apreciarse, la CGT aparece completamente consubstanciada con la gestión universitaria a la que define como propia y plantea una serie de términos claves para comprender las pujas dentro de las diversas facciones del peronismo, principalmente la

<sup>60</sup> *El Atlántico*, 05/05/1975.

<sup>61</sup> *La Capital*, 09/05/1975.

<sup>62</sup> *El Atlántico*, 08/05/1975.

noción de «infiltrado»<sup>63</sup>. Por «izquierda» y por «derecha», las diversas facciones se acusaban de no guardar la debida «lealtad» hacia el líder y hacia «el pueblo». Para rebatir esa acusación, los sectores de «derecha» apelaban a dos términos para minar la legitimidad de la *juventud maravillosa: entrismo e infiltración*. En efecto, el peronismo ortodoxo al que terminó avalando Perón y que luego de su muerte cobraría mayores espacios de poder, ya cuestionaba a los sectores juveniles por sus consignas e ideología de «izquierda». A la «patria socialista» le oponían la «patria peronista», coreada con firmeza en cada acto sindical para marcar la diferencia con sectores a los que acusaban de no ser «verdaderamente peronistas». Al nominarlos como comunistas y colocarlos al servicio de potencias extranjeras como la Unión Soviética, las facciones «de derecha» del peronismo nunca dejaron de plantear que la izquierda tradicional había formulado la estrategia del «entrismo» para apoderarse del movimiento peronista y vaciarlo de su doctrina original. Al considerar cada vez con mayor frecuencia como «infiltrados» a los miembros de la JP (integrantes o no de las organizaciones armadas), la lógica binaria de la guerra, amigo-enemigo, ya estaba plasmada completamente en las concepciones nativas de las luchas facciosas dentro del peronismo en la década del setenta. Todo ello dentro de una prédica anticolonialista y nacionalista que formaba parte del lenguaje revolucionario de la época, tanto de los sectores de «derecha» como de «izquierda».

Esta clase de conflictos que se produjeron a nivel nacional, adquirió, según Servetto, «la racionalidad de una guerra de posiciones donde se ganaban o perdían espacios de poder. Y en esta lucha entre la izquierda revolucionaria y la derecha político-sindical todos los métodos fueron válidos, y su despliegue afectó e invadió por igual a todas las instituciones del Estado»<sup>64</sup>. En ese sentido, la misma autora se refiere a una «ausencia de reglas partidarias para dirimir sus conflictos internos»<sup>65</sup> que llevó a una espiral de fragmentaciones, en la segunda mitad de 1975, que se vieron representadas en un congreso partidario en el mes de agosto: los «verticalistas» que adherían sin concesiones a la presidenta María Estela Martínez; los «moderados» o «democráticos» entre los que se destacaban Ítalo Lúder y Ángel

<sup>63</sup> Un análisis sistemático del concepto de *lealtad* en el peronismo fue desarrollado por Fernando Balbi, *De leales y traidores. Valor moral y concepción de política en el peronismo*, Buenos Aires, Antropofagia, 2007.

<sup>64</sup> Alicia Servetto, 73/76. *El gobierno peronista contra las «provincias montoneras»*, op. cit., p. 208.

<sup>65</sup> *Ídem*, p. 208.

Robledo; el sindicalismo liderado por el metalúrgico Lorenzo Miguel; y la «vertiente bonaerense antiverticalista, orientada por el vicegobernador Victorio Calabró»<sup>66</sup>.

Extremadamente difícil resulta encontrar en todo el período una toma de posición más elaborada y sistemática como la que apareció en los medios locales el 11 de mayo de 1975. Luego de una reunión de la Mesa Directiva de la CGT regional Mar del Plata, en la que participaron los secretarios generales de los gremios adheridos, además del aporte de la Juventud Sindical Peronista (JSP), se emitió un duro comunicado, en el que se le declaró «la guerra abierta al terrorismo en todas sus formas»<sup>67</sup>. Allí, la central obrera clasificaba el «terrorismo» a combatir en tres tipos: gremial, social y político. El primero de ellos era definido como aquel que:

«produce amenazas, secuestros de dirigentes de sindicatos, delegados de fábricas y activistas, cuando no mata a mansalva y desde las sombras. Agitación de los obreros incitándolos a una menor producción y provocaciones de todo tipo, todo ello dirigido a crear desorden, inseguridad, pánico y paralización de la producción. Con ello logran producir el terrorismo económico, tal como el desabastecimiento, la especulación en todos los órdenes, mercados negros, etc., etc., cuyas consecuencias las debe soportar el pueblo».

El segundo tipo, el «terrorismo social», lo circunscribían al ámbito universitario. Además de defender fervorosamente la actual gestión de la recientemente nacionalizada casa de altos estudios, en el texto se puntualizaba que en las gestiones anteriores de la universidad se debió «soportar una conducción universitaria antinacional y anarquizante, convirtiendo dicho ámbito académico en foco de la subversión liberal marxista». Por supuesto, apelaban al cliché de «poner la universidad al servicio del pueblo», que habían logrado –según el parecer de la central obrera– las nuevas autoridades «erradicando de su espacio físico e intelectual a los elementos disociadores en los diferentes claustros». Más en detalle, en el texto se leía que «la subversión carente de argumentos valederos para rebatir esa política educacional, contesta con bombas en los domicilios de las autoridades, demostrando una vez más que usa sus instintos criminales como agentes vernáculos del dinero extranjero y movilizados por ideas ajenas a nuestro sentir nacional».

<sup>66</sup> *Idem*, pp. 220-221.

<sup>67</sup> Las citas posteriores del documento corresponden a lo aparecido en: *La Capital*, 11/05/1975.



La tercera clase de «terrorismo», el político, refería a la «izquierda marxista» que atenta contra «dirigentes obreros, autoridades universitarias y dirigentes políticos peronistas». En la misma sintonía, se cargaba contra el «sugestivo silencio que frente a estos hechos guardan instituciones políticas, profesionales y civiles que se dicen amantes de la paz y la democracia», por lo que condenaba enfáticamente que no se tomara posición sobre estos hechos. Se proponía un «estado de alerta» además de llamar a «combatir activamente» a la especulación, el desabastecimiento y la «agresión guerrillera». El comunicado finalizaba con una referencia a palabras de Juan Domingo Perón: «todos somos beligerantes ante el enemigo común».

La universidad, a través de sus más altos funcionarios, siguió expresándose en términos similares. En una solicitada, se recordaba que:

«Nuevamente la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha sido atacada por la acción disolvente y antinacional de la guerrilla. Los ataques terroristas, perpetrados contra el delegado de la Facultad de Turismo y contra el secretario general de la universidad, demuestran que el camino emprendido por estas autoridades, no es equivocado. La acción desplegada en la Universidad Nacional, es sin lugar a dudas acertada, pues proviniendo los ataques de la antipatria, la causa es que la Universidad está al servicio de la Nación y del Pueblo argentino»<sup>68</sup>.

También allí se agradeció:

«la solidaridad y apoyo que a diario recibimos de los verdaderos forjadores de la grandeza nacional: los trabajadores sindicalmente organizados, quienes por fin han encontrado en el saber universitario, una prolongación intelectual de sus aspiraciones de justicia social, independencia económica y soberanía política, y no la Universidad receptora de políticas elitistas, antipopulares y extranjerizantes».

La misma solicitada condenó la violencia en todas sus formas, y hasta el caso de la desaparición de la decana de la Facultad de Humanidades de UC, María del Carmen Maggi, aunque sin nombrarla.

En el mes de junio de 1975, José Catuogno fue nombrado por decreto 1414 del PEN como primer rector normalizador de la UNMdP, siendo puesto en funciones

<sup>68</sup> *La Capital*, 13/05/1975.

por el secretario general a cargo de despacho, el mencionado Eduardo Cincotta, flanqueado además por Demarchi. En su discurso de asunción, Catuogno destacó los «principios fundamentales que son la unidad y la pacificación». Además, el nuevo rector señaló que «nuestra función como universidad es, indiscutiblemente, estar junto al pueblo, haciéndonos intérpretes de todas las inquietudes. Será la función esencial la recuperación del hombre argentino y para ello debemos primero recuperar nuestra cultura, desalojando todas las ideas extrañas al sentimiento nacional»<sup>69</sup>. No faltaron las alabanzas a Juan Domingo Perón y sus gestos de unidad con los partidos políticos y la nación toda. El rector normalizador destacó, según aquella misma nota periodística, que las «Fuerzas Armadas, junto a las del trabajo, ofrecen diariamente sus cuotas de sangre para evitar la destrucción de las instituciones republicanas». Y finalmente, «formuló una exhortación para que la juventud responda a las inquietudes auténticamente nacionales».

En esos meses, se siguió intensificando la relación entre la cúpula directiva de la casa de altos estudios y la CGT local, y también de la Juventud Sindical Peronista. Además de los hombres que aportaba a la gestión, la participación orgánica de la central obrera en diversos asuntos administrativos y académicos alcanzó su plenitud. Pero, sobre todo, no pueden soslayarse los marcados gestos de comunión político-ideológica y uniformidad discursiva. En ese sentido, las alusiones a la necesidad de lograr un clima de «paz y trabajo» se hacían cotidianas, tanto en comunicados formales como en declaraciones informales. Todas las actividades conjuntas entre la universidad y la CGT se poblaron de declaraciones en favor de la unidad del pueblo argentino en apoyo del gobierno nacional, definiendo habitualmente como «infantilismo revolucionario» al servicio de intereses y dinero extranjero al accionar de las OPM. De todo ello había tomado cuenta el diario metropolitano *La Opinión*, que se refirió a «un proceso de apertura a las fuerzas sindicales» en el que «el gremialismo acentúa su participación en los claustros»<sup>70</sup>. En la misma nota, se citaban declaraciones del secretario Cincotta, quien había afirmado que «esta casa estará integrada al movimiento obrero no sólo por lo contactos permanentes que mantenemos con la CGT Regional y las 62 Organizaciones, sino también porque el rector contará también con un asesor gremial».

<sup>69</sup> *La Capital*, 02/06/1975.

<sup>70</sup> *La Opinión*, 07/03/1975.

## LA TRAMA COTIDIANA DE LAS HUMANIDADES EN MAR DEL PLATA

Poco antes de quedar bajo la órbita nacional, los principales cambios estructurales en la Facultad de Humanidades de la UP se iban sintiendo de manera muy directa. Con motivo del ingreso de 1975, los medios gráficos publicaron información referida al «estado de alerta» que los estudiantes de esa facultad emitieron ante lo que consideraban una política de cierre de carreras. El rectorado había emitido la resolución 339 el 24 de febrero mediante la cual no se permitía el ingreso a primer año en las carreras de Sociología, Ciencias Políticas y Antropología, en un claro preludio de lo que ocurriría muy poco tiempo después. Los comunicados emitidos por el claustro estudiantil solían ocuparse del ministro Ivanissevich, a quien acusaban de propiciar «una universidad de elite fiel a las necesidades de un país dependiente»<sup>71</sup>. Mientras tanto, el encargado de despachos Cursack ya había nombrado a José Catuogno, quien luego sería rector, como asesor académico. El nuevo funcionario negó ante los medios de comunicación locales que fueran a desaparecer carreras en la universidad y prefirió hacer referencia a una «reestructuración»<sup>72</sup>.

La ofensiva final contra las carreras de ciencias sociales fue llevada adelante por el nuevo delegado de la Facultad de Humanidades, Fernando Luchini, designado luego de la renuncia de Juan Antonio Bargas, quien se alejó de la política universitaria luego del explosivo que le colocaron en su vivienda. Luchini era un reciente graduado en Ciencias Políticas, llevado al cargo por un grupo de militantes de la JP Lealtad, en quienes el rectorado había confiado para que se hicieran cargo de una facultad que de ningún modo podía ser manejada por la CNU. Gran parte de los considerandos de los diversos actos administrativos que emanaban de decanato estaban cargados de firmes posicionamientos políticos. Todos ellos insistían en marcar una diferencia con etapas anteriores de gestión («épocas signadas por el desorden», sobre todo la de la «universidad nacional y popular»). Ante las inminentes modificaciones en los planes de estudio, el mismo decano había emitido un comunicado en el que, además de cargar duramente contra la violencia «terrorista», anunciaba drásticas medidas entre las que destacaban la reestructuración de las carreras para «elevar el nivel docente»<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> *El Atlántico*, 05/03/1975.

<sup>72</sup> *El Atlántico*, 26/03/1975.

<sup>73</sup> *La Capital*, 12/05/1975.

Por esos días, también cobró estado público la obligatoriedad de cursar, para los alumnos de 1er año, la materia «Tríptico Nacional». Ello se había decidido en plenario de rectores de universidades nacionales, para que los ingresantes tuvieran criterios y bases comunes al iniciar sus carreras. Esa nueva obligación curricular se dictaba durante todo el año lectivo y tenía una duración de tres meses con requisitos de asistencia. Pero una de las primeras tareas llevadas a cabo por el nuevo decano normalizador fue la reestructuración de las carreras, para lo cual se organizaron «mesas de trabajo», orientadas a «realizar la transformación de la Facultad y su integración dentro del conjunto de la Comunidad Organizada»<sup>74</sup>. En la misma sintonía, el decanato estableció un seminario de «Profundización de Temas Nacionales», con carácter obligatorio para docentes y alumnos de 5° año de toda la Facultad, y que abarcaba temas tales como la Cultura Nacional (raíces y componentes), El Proyecto Nacional, la Tercera Posición y la Institucionalización de la Cultura Nacional. Es importante destacar que, paralelamente, el Poder Ejecutivo estaba propiciando un marco legal que «sostuvo y dio espacio al avance de las prácticas de represión clandestinas desde muy temprano»<sup>75</sup> y que apelaba a nuevas y vagas figuras delictivas.

A mediados de 1975, los funcionarios de rectorado, Cincotta y Demarchi, anunciaron un plan de acción para todas las facultades, que contemplaba una «reestructuración de las carreras que en ella se cursan, a la luz de las necesidades regionales y del país y de las posibilidades que presenta el marco de carreras de la universidad. Integración del claustro docente idóneo, consustanciado con los grandes intereses de la Nación»<sup>76</sup>. Ambos directivos aprovecharon la ocasión para recordar la legislación vigente que prohibía la realización de asambleas y actividades político-partidarias. Todo ello dentro de un «permanente esfuerzo por dotar al alumno de una conciencia histórica nacional, que robustezca el amor a la Patria y el acatamiento a las normas de sana convivencia»<sup>77</sup>. En la resolución de decanato n° 345 del 7 de agosto de 1975, Luchini entendió que:

<sup>74</sup> Resolución n° 165, 03/06/1975.

<sup>75</sup> Marina Franco, *Un enemigo para la nación*, op. cit., p. 133.

<sup>76</sup> *La Capital*, 03/06/1975.

<sup>77</sup> *Ibíd.*

«la deformación que ha sufrido la enseñanza universitaria a causa del abuso que se ha hecho de ideas y teorías ajenas a nuestra cultura nacional las que, bien utilizadas habrían ayudado a enriquecer nuestro patrimonio cultural, a elevar el nivel académico y mantenernos al tanto de las distintas corrientes de ideas que agitan el mundo pero que en manos de personajes inescrupulosos, traficantes de ideologías, se convierte en un arma de deformación de nuestro ser nacional».

En los considerandos de la resolución, el decano normalizador agregó:

«Que las personas conscientes del daño que se ha hecho durante años y años de prédica liberal, marxista, anarquizante y siempre contrarios a los altos intereses de la Nación, más si ocupamos posiciones directivas en la estructura educacional, debemos arbitrar los medios de combatir ese mal que puede ser irreparable. Que para revertir ese proceso deformante, no sería saludable en modo alguno restringir el uso y transmisión de ideas por nefastas que estas nos parezcan, ya que la represión indiscriminada nunca ha sido un medio idóneo para convencer y mucho menos para formar las mentes jóvenes. Que, por el contrario, es preciso combatir las ideas con ideas mejores y que es posible recuperar a las mentes extraviadas o confusas mostrándoles el camino correcto...».

Todo este tipo de modificaciones no dejó de tener su impacto en los medios gráficos locales. El decano Luchini justificaría, en los meses finales de 1975, que:

«el objetivo de reestructuración es revertir el proceso anterior, con carreras producto de la improvisación que daban profesionales que carecen de inserción en el mercado de trabajo local y nacional –con honrosas excepciones– que dilapidaba los dineros del pueblo y lanzaba a la comunidad individuos potencialmente frustrados en su vocación»<sup>78</sup>.

Además: «reveló que al cambiarse radicalmente los planes de estudio, fueron creados títulos intermedios que ofrecen la posibilidad a los alumnos de integrarse al aparato productivo del país al promediar su carrera, en tanto que fueron convertidas en carreras

<sup>78</sup> *La Capital*, 13/11/1975.

de postgrado aquellas cuya finalidad es incompatible con la falta de madurez y una intensa formación previa del sujeto, dotándose a todas las especialidades de aspectos coincidentes con las necesidades concretas y sus instituciones públicas o privadas»<sup>79</sup>.

Allí mismo se refirió a los profesorados para cubrir las exigencias de la enseñanza primaria y media, y a la creación de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Los problemas administrativos generados por el cierre de inscripción en febrero de las carreras que le dieron nacimiento a la Facultad de Humanidades de la UP en 1969, fueron aumentando con el incesante incremento en los despidos docentes, bajo la figura administrativa de la «limitación», que no se interrumpiría sino hasta los primeros meses de 1976. Lo mismo ocurrió con los cargos de gestión de las distintas carreras, quienes fueron reemplazados en pleno.

Una vez concretada la nacionalización de la UP y la absorción de la UC se dejaron sin efecto los planes de estudio vigentes a la fecha, aunque se garantizó la continuidad para los que estaban cursando las carreras. En esa misma Resolución de Rectorado n° 876 del 7 de noviembre de 1975, se crearon las carreras que iban a formar parte de la oferta académica de la Facultad de Humanidades. Mientras que casi todas las carreras provenientes de la Universidad Católica fueron ratificadas, la suerte de Antropología, Sociología, Psicología y Ciencias Políticas fue distinta. Antropología, Sociología y Ciencias Políticas fueron transformadas en especializaciones de postgrado (nunca concretadas) en el marco de un profesorado en Ciencias Sociales y posterior licenciatura. Pese a que los antecedentes de los docentes que ocupaban los cargos eran sensiblemente inferiores a quienes estaban renunciando o directamente eran limitados en sus funciones, los argumentos del decano estaban focalizados en la baja calidad de los profesores, además de otros aspectos como la desorganización y el caos imperantes en otras épocas, en clara alusión a la «universidad nacional y popular» de 1973.

El cambio de decano a principios de 1976 no trajo demasiadas modificaciones. El reemplazante de Luchini, Gabriel Prieto, un graduado en Sociología en la UCA en Buenos Aires, emitió a los pocos días de asumir, la Resolución de Decanato n° 36 del 18 de febrero de 1976, en la que se lamentaba por los «cuantiosos años de desorganización académica» que «habían hecho olvidar al docente universitario su condición de servidor público» y que habían posibilitado que las cátedras se trans-

<sup>79</sup> *Ibíd.*

formaran en «ámbitos de libre accionar académico, sumamente caprichosos y con escasa o nula relación funcional con los planes de estudio y la formación profesional de los educandos». En ese mismo texto, el nuevo decano describía una etapa anterior de «grave desorientación», de «pérdida del nivel» y de «anarquía académica reinante, desprovista de todo ordenamiento que le determinase al alumno sus obligaciones y derechos». Prieto estableció desde su nombramiento un férreo control de los departamentos sobre los programas de estudio, que obtenían a partir de allí una directa injerencia sobre el planeamiento de las asignaturas. Prieto, directamente ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, se mantendría varios meses después del golpe militar, y no es posible encontrar en los actos administrativos posteriores al 24 de marzo de 1976, una sola señal de que la política nacional había experimentado un cambio tan profundo. Ni siquiera el ritmo de las limitaciones se intensificó, y continuó en la misma línea que se había inaugurado en 1975.

Otros profesores siguieron renunciando y en su lugar fueron nombrados docentes, gran parte de ellos con escasos o nulos antecedentes. Para ese tiempo, la suerte de las carreras de Ciencias Sociales estaba echada. Aquellos proyectos nacidos al calor de la radicalización política de la sociedad argentina en general y particularmente del campo intelectual, sólo tenían una existencia administrativa residual. Ya fuera de la universidad sus referentes claves, luego cerrada su inscripción a primer año en 1975, apenas faltaba un acto administrativo que las eliminara por completo del nuevo escenario institucional. Y en efecto, la Ordenanza del Consejo Superior n° 89 del 7 de diciembre de 1977 determinó la desaparición de las carreras de Antropología, Sociología, Ciencias Políticas y Psicología a partir de 1978<sup>80</sup>. Como contrapartida, las carreras provenientes de la Universidad Católica (Historia, Letras, Geografía, Inglés) pasaron a dominar exclusivamente la oferta académica de una Facultad que ya no ofrecía ninguna de esas carreras que le habían dado vida a su proyecto original.

<sup>80</sup> El primer ministro de educación de la dictadura, Ricardo Pedro Bruera, se encargó de limitar la autonomía universitaria al exigir autorización ministerial para la creación de nuevas carreras y facultades. Además, interactuó estrechamente con las delegaciones militares de las distintas regiones para mantener bajo un estricto control la disciplina de los estudiantes y los legajos de docentes y no docentes. Véase Laura Graciela Rodríguez y Germán Soprano, «La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)», en: *Nouveaux Monde. Mondes Nouveaux. CERMA-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales*, 2009, París, [en línea]. Disponible en : <http://nouveauxmonde.revues.org>.

## CONCLUSIONES

En este artículo se ha querido mostrar un relato ejemplar que anticipa la tragedia que viviría la Argentina con el terrorismo de Estado. En clave narrativa, se han presentado parte de los conflictos que atravesaron a la vida universitaria, poniendo en escena a distintos grupos en pugna, principalmente a través de sus manifestaciones discursivas pero también de los enfrentamientos violentos (muchos de ellos de consecuencias trágicas) que signaron el período en el que «la disputa por el monopolio de la identidad peronista invadió las instituciones del estado, se superpuso a ellas y las arrasó»<sup>81</sup>.

Todos estos hechos han sido analizados antropológicamente, apelando a la herramienta clásica del análisis situacional<sup>82</sup>, para poner énfasis en la dimensión conflictiva de esos verdaderos dramas sociales en los que se imponen, en diversas épocas y situaciones, maneras específicas de resolver los conflictos. Este análisis situacional permite entender, a través de la consideración de eventos accidentales, excepcionales y conflictivos, los comportamientos efectivos de las personas que están involucradas en esos procesos, considerando los roles y las posiciones adoptadas por todos los actores involucrados en las disputas. De ese modo, pueden iluminarse aspectos importantes de los modelos abstractos que se construyen a partir de las conductas esperables. Así hemos visto, al menos parcialmente, el funcionamiento de un sistema faccional que, traducido a las disputas universitarias, daba cuenta de complejas redes que, en algunos casos, estaban compuestas por grupos interactivos con una organización clara y visible y con líderes reconocidos. Ejemplos de ello pueden ser los sindicatos o la propia central obrera, como también el caso de la CNU o agrupaciones estudiantiles con una estructura burocrática visible, como la JUP. Pero en general, estaban entrecruzados por lealtades que podían llegar a ser contradictorias y sobre todo, cambiantes. De hecho, los nombramientos pen-

<sup>81</sup> Alicia Servetto 73/76. *El gobierno peronista contra las «provincias montoneras»*, op. cit., p. 245.

<sup>82</sup> Este tipo de análisis está desarrollado detenidamente en diversos textos de los principales referentes de la Escuela de Manchester en antropología social. Pueden consultarse Victor Turner, *Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society*, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1974; «Dewey, Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of Experience», en: Victor W. Turner y Edward M. Bruner (eds.), *The Anthropology of Experience*, Chicago, University of Illinois Press, 1986, pp. 33-44; A. L. Epstein, «The Case Method in the Field of Law», en A. L. Epstein (ed.), *The Craft of Social Anthropology*, Londres, Tavistock, 1967, pp. 205-230; J. Van Velsen, «The Extended-case Method and Situational Analysis», en: A. L. Epstein (ed.), *The Craft of Social Anthropology*, Londres, Tavistock, 1967, pp. 129-149.



dulares, las fisiones dentro de las facciones (como el caso de JP Lealtad) no hacen más que mostrar la complejidad de la organización interna del peronismo, sobre todo en una época tan conflictiva como la década del setenta<sup>83</sup>.

En definitiva, se ha descrito el modo en que las ciencias sociales comenzaron a ser reprimidas sistemáticamente en las universidades argentinas una vez que se impuso un modo de concebir la universidad, que también era una manera de entender al país y al propio peronismo, al que las principales facciones que estaban en pugna adherían fervorosamente. La eliminación de las currículas en ciencias sociales que le habían dado identidad institucional a la Facultad de Humanidades de la universidad estatal aparece, en este relato, como una lógica consecuencia de los conflictos descritos. Ya la efervescencia de la «primavera camporista» también había impuesto una serie de limitaciones puntuales a los proyectos que no se plegaran a una particular idea de poner la universidad al «servicio al pueblo»<sup>84</sup>. Pero una vez que se invirtió el equilibrio de fuerzas en el espacio universitario nacional y provincial, se produjeron una serie de cambios intempestivos que, en el caso marplatense, estuvieron enmarcados en el proceso de la nacionalización de la UP y la UC. Así es que, desde 1974, se estaba definiendo la cristalización de una serie de conceptos sobre el funcionamiento de la universidad que descansaban en la convicción de eliminar cualquier foco creador de «desorden», «caos» o «anarquía». Los sectores –genéricamente– «de derecha» del peronismo que habían conseguido el control de los recursos estatales, llevaron adelante una política de persecución y de represión –estatal y paraestatal– sobre aquellos actores y grupos que se les oponían. Trasladado ello al espacio universitario y a los alcances de esta investigación, la supervivencia de carreras como Antropología<sup>85</sup>, Sociología y Ciencias

<sup>83</sup> La «facciosidad» es una de las características de la política de la época –antes y después del golpe de 1976– que ha sido señalada por autores como Hugo Vezzetti, *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

<sup>84</sup> Gastón Julián Gil, «Ideología, represión e investigación de campo», *op. cit.*

<sup>85</sup> El grupo de intelectuales reunidos en torno a la revista *Cabildo*, de gran influencia en el ámbito educativo durante el «Proceso» militar, presionó sistemáticamente para lograr el cierre de las carreras de ciencias sociales que se seguían dictando en las universidades nacionales. En el número 16, correspondiente a mayo-junio de 1978, en un artículo denominado «Antropología y Subversión» afirmaban que «era sabido que los antropólogos aprovechaban los viajes de investigación pagados por el Estado para *vender piezas arqueológicas y comprar armas*». En: Laura Graciela Rodríguez, «La derecha en la universidad (1976-1983)», ponencia presentada en las *II Jornadas de Historia de la Universidad Argentina*, Universidad Nacional de General Sarmiento, 4 y 5 de noviembre de 2010.

Políticas se hacía poco menos que imposible, ya que esas disciplinas implicaban en el imaginario dominante de la política argentina (que seguiría operando en tiempos de gobierno militar) una seria amenaza contra la tan deseada –y alegada por los funcionarios– «paz» social.

Entonces, se ha intentado, en este trabajo, reponer las racionalidades en conflicto en los debates de aquellos años, dando cuenta de las representaciones nativas que entraron en juego con mayor fuerza en el espacio universitario de la época. Para ello, se han puesto en evidencia los distintos entramados institucionales, algunos de los principales núcleos argumentales y, sobre todo, las representaciones de aquellos actores de época que fueron relevantes en una parte de la vida universitaria marplatense de la primera mitad de la década del setenta. Por consiguiente, se ha planteado una descripción –lo más precisa posible– de la complejidad y la importancia de los antagonismos que se habían hecho carne en el peronismo mucho tiempo antes del golpe de Estado de 1976, y que se expresaron de manera elocuente en el espacio universitario, y en particular en la Facultad de Humanidades de la universidad estatal. En concreto, todo el camino previo a la instauración de formas de represión estatal y paraestatal que revelarían mecanismos de ilegalidad desconocidos en una sociedad argentina que se preparaba, sin conciencia plena, para vivir su etapa más oscura gobernada por un Estado criminal.

### **Registro bibliográfico**

GIL, GASTÓN JULIÁN

«Nacionalización y represión en la Universidad de Mar del Plata. El cierre de las carreras de ciencias sociales (1975-1977)», en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria semestral, año XXIV, N° 47, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre, 2014, pp. 129-162.

### **Descriptores · Describers**

violencia política / historia de la universidad / peronismo / represión / facciones  
Political violence / history of university / peronismo / repression / factions